

que lleva a olvidar el grado de implicación personal e intrasferible, irreductible a explicaciones sociológicas puramente mutilaría gravemente el análisis del caso. No podemos decir, como Quintana, que "crímenes son del tiempo, no de España". No podemos decir que la culpa la tiene el sistema, no un hombre en particular.

Sin embargo, es preciso decir que la responsabilidad de Barra se extiende más allá del delito específico que cometió. Mucho más importante que tal acto ilícito, que no es intrascendente, resulta ser el daño político que causa a un aparato gubernamental ya muy vilipendiado por las malas artes de quienes rechazan sus acciones socialmente útiles y necesarias, o examinado con tanta severidad por quienes quisieran verlo más netamente al servicio de las mayorías.

La desviación de la Reforma Agraria, de la que Barra fue partícipe es también parte del expediente político que la actual debilidad de Barra permite dilucidar, sin perjuicio de que ya lo hayan hecho calificadamente otras personas. La decisión de comprar tierras, en vez de expropiarlas, constituyó un grave error, del que no se debe hacer cómplice la actual administración. Unos dos mil millones, según cálculos, costó la adquisición de predios para entregar a los campesinos. Ello, si bien es consecuencia del embrollo jurídico en que se convirtió el claro ordenamiento agrario primigenio de la Revolución, sólo pudo ser posible en vista de la política de imposible conciliación que ha emprendido el régimen. Todo gobierno, en países como el nuestro, tiene que optar por una de las partes en la lucha social. Quedarse a medias sólo provoca el enojo de los segmentos a los que se busca contentar o aplacar.

Esa política agraria, onerosa y equivocada, ha hecho caer grave desprestigio sobre una de las líneas históricas de acción más claramente definitorias del Estado mexicano posrevolucionario. Los enemigos de la Reforma Agraria, que lo son porque obstruyen todo progreso de la acción estatal en favor de las mayorías, han tenido, con

las tareas rurales del pasado sexenio, y con el escándalo penal de Barra, pábulo para sus interesadas y mezquinas críticas. Hay que deslindar los terrenos. La política agraria de la Revolución, la que estriba en entregar la tierra a quien la trabaja, fue puesta en quiebra por funcionarios como Barra que resultan así aliados y no enemigos de los adversarios de la doctrina agraria mexicana.

La misma línea histórica que llamó "agarristas" a los agraristas queriendo significar con ello que el derecho del Estado a expropiar para dotar a los desposeídos era un simple robo, busca arrojar sobre las tesis agrarias las miasmas que fluyen de los malos manejos de algunas autoridades agrarias. Es preciso poder comprobar que una política agraria al mismo tiempo audaz y prudente es posible con honradez, porque no están indisolublemente ligadas, sino al contrario, la corrupción y el agrarismo.

Dijo un día el entonces presidente Echeverría que nadie puede arrojar la primera piedra contra la corrupción porque nadie está exento de ella. Muy probablemente tiene razón en la segunda parte de su aserto. Ya la voz popular transformó el slogan principal de la campaña lopezportillista en una fórmula de ácido escepticismo: la corrupción somos todos. Pero admitir como inexorable el enfangamiento de nuestra sociedad es abdicar de nuestras posibilidades de realización como pueblo. Tendremos que negarnos a ello.

De allí la importancia de hacer trascender de su ámbito ínfimo la prisión de Barra. Habría que utilizar esta ocasión no para la satisfacción de venganzas, siempre ruinmente fundadas, sino para consolidar al Estado mexicano, cuya condición histórica no puede ser dañada por sus malos servidores.

Un acto como la consignación y el proceso a Barra no basta para devolver la confianza al público en sus instituciones. Pero puede indicar que, por su propia supervivencia, el Estado puede en verdad autocriticarse.

Fondo Del Drama

DEVOLVER LA CONFIANZA, PERO PRUEBA
QUE EL GOBIERNO PUEDE AUTOCRITICARSE

Dijo un día el entonces presidente Echeverría que nadie puede arrojar la primera piedra contra la corrupción porque nadie está exento de ella. Muy probablemente tiene razón en la segunda parte de su aserto. Ya la voz popular transformó el slogan principal de la campaña lopezportillista en una fórmula de ácido escepticismo: la corrupción somos todos. Pero admitir como inexorable el enfangamiento de nuestra sociedad es abdicar de nuestras posibilidades de realización como pueblo. Tendremos que negarnos a ello.

Luis Echeverría... "nadie puede arrojar la primera piedra contra la corrupción".

